

Agosto 4 de 1938

30ª REUNION — Continuación de la 19ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser, Carlos A. Pita
y doctor Juan Vilgré La Madrid

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguilar, Henoch D.
Aguila, Juan Carlos
Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperin, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Aranjo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Barriónuevo, Gerardo
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Biancofiore, Rafael
Boatti, Ernesto C.
Cafferata, Juan F.
Castillo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Coutel, Carlos D.
Critto, Miguel
Damonte Taborda, Raúl
De Miguel, Benito
Devoto Acosta, Alcibiades
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eberlé, Enrique
Espil, Alberto
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos

Fazio Rojas, Lorenzo
Ferreira, Antenor R.
Figueras, Julio A.
Garona, Juan A.
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Güerci, José María
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Victor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Hernández, Victorio
Horne, Bernardino
Illanes, Eloy J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Isurieta Fourquet, Agustín
Jaramillo, José María
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Landá, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lesica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López, Héctor S.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Morrough Bernard, Juan F.
Mugica, Adolfo

Muniagurria, Walter Julio
Noel, Carlos M.
Noel, Martín
Onsari, Fabián
O'Reilly, Guillermo R.
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osorio Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Saccone, Romeo D.
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoos Lastra, Dionisio
Simón Padrés, J.
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solis, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.

Tapia, Numa
Teissaire, Eduardo (h.)
Urien, Enrique César
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Vilgré La Madrid, Juan
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Cabral, Humberto
Duffy, Eduardo N.
Ghioldi, Américo
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Jiménez, Mario
Martínez, Manuel
Sáenz, Mario

AUSENTES, CON AVISO:

Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Carrá, Agustín J.
Quintana, Fanelón

AUSENTES, SIN AVISO:

Aguirre Cámara, José
Arias Uriburu, Juan
Boero, Albino
Guerrero, José Rafael
Mihura, Enrique F.
Paz Posse, Ramón D.
Prat Gay, Fernando de
Radío, Pedro
Rocha, Justo V.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Indicación del señor diputado Pastor, sobre trámite de los asuntos entrados e inserción de una nota. Es aprobada.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre emisión de títulos de deuda pública externa, para ayuda financiera a la Municipalidad de Buenos Aires.
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre suspensión de la aplicación de la ley número 8.855, en cuanto autoriza la construcción de la avenida 9 de

Julio, de Belgrano al Sur y de Córdoba al Norte.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre reforma de la ley número 189, de expropiación de bienes.

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo, formulando observaciones a los proyectos de ley referentes a distintas iniciativas para conmemorar el cincuentenario de la muerte de Sarmiento.

V.—Comunicaciones oficiales.

VI.—Despachos de comisión.

VII.—Peticiónes particulares.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Pizarro, sobre construcción de una línea telefónica de Ciénaga de Coro a La Argentina, departamento Minas (Córdoba).

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Pizarro, sobre dique de embalse sobre el río Soto, en Pozo del Carmen, en el lugar denominado El Vallecito, departamento Cruz del Eje (Córdoba).

X.—Proyecto de ley del señor diputado Mugica y otros, sobre pensión a las señoritas Angela y María Delicia Díaz Vélez.

XI.—Proyecto de ley de los señores diputados Pandolfo y Biancofiore, sobre edificio para hospital en la localidad de Las Toscas (Santa Fe).

XII.—Proyecto de ley del señor diputado Solá y otros, sobre adquisición de los derechos de autor de las obras del doctor Alcides Calandrelli.

XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Espil y otros, sobre aumento de subsidio a la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

XIV.—El señor diputado Espil reproduce un proyecto de ley sobre creación de una colonia de menores en San Andrés de Giles.

XV.—Proyecto de ley del señor diputado Espil y otros, sobre pensión a la señora Emilia Anaya de Tenreiro.

XVI.—Proyecto de ley de los señores diputados Piedrabuena y Pagano, sobre subsidio a la Sociedad Damas de Beneficencia de Villa Ocampo (Santa Fe).

XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Pastor, sobre contribución de la Nación a los gastos que demande la celebración del 50º aniversario de la muerte de Sarmiento, en San Francisco del Monte de Oro (San Luis).

XVIII.—El señor diputado Cafferata y otros reproducen un proyecto de ley sobre cons-

trucción de núcleos de casas baratas, tipo granja familiar, en los territorios nacionales.

XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Cafferata y otros, sobre subsidio a la Sociedad de Beneficencia de Córdoba, para pabellón de asistencia a tuberculosos.

XX.—Proyecto de ley del señor diputado Cafferata y otros, sobre monumento al misionero en la ciudad de Posadas, sobre la margen del río Paraná.

XXI.—Proyecto de ley del señor diputado Critto y otros, sobre pensión a la señora Isabel López García y señorita María García.

4.—Orden de la labor.

5.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley de vinos.

6.—Indicación del señor diputado Dickmann, sobre inserción de una nota. Es aprobada.

7.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley por el que se declara casa histórica el edificio de la calle Juramento y Cuba, de Buenos Aires.

8.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley sobre indemnización en los casos de despido por matrimonio.

9.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre permiso al ciudadano Carlos M. Viaña Rodríguez para aceptar el cargo de cónsul de Bolivia.

10.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre permiso a los ciudadanos Jorge Oster, Alejandro Menéndez Behety y Luis Ortiz de Guinea para aceptar cargos de gobiernos extranjeros.

11.—Se considera el despacho de la Comisión de Higiene y Asistencia Social en el proyecto de ley sobre creación del Instituto Nacional de Investigación Física en relación con la patología humana. A moción del señor diputado Urien, se resuelve que vuelva a comisión.

12.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley disminuyendo a cinco años el plazo de la ley número 11.173, del hogar ferroviario, para préstamos hipotecarios a empleados y obreros.

—En Buenos Aires, a cuatro días del mes de agosto del año 1938. siendo la hora 15 y 59:

Cámara adhiere con toda decisión a este despacho de la Comisión de Legislación.

La casa histórica —ahora se la llamará así— no sólo es el recuerdo imperecedero y materializado para las futuras generaciones, del lugar en donde se discutió en forma fundamental un problema institucional de nuestro país, sino también del Parlamento, que cumple una función esencial, y que patentiza cómo en la vida argentina ha sabido construir definitivamente la organización del país. Es así, también, en estos momentos de fronda contra el régimen parlamentario, la manera de afirmar ante las generaciones argentinas futuras, cuánto deben al Parlamento la nacionalidad y la patria.

En esa casa histórica funcionará —en base a una iniciativa que dentro de breves instantes considerará la Honorable Cámara— un museo donde se guardarán las reliquias de una gran figura de la organización nacional, que ya en *Argirópolis* había planteado el problema de la Capital de la República: está de más el decir que me refiero a Domingo Faustino Sarmiento.

Y ya que con esta iniciativa se inmortaliza un gran episodio, la vida legislativa del país, en un momento que ha sido dramático, deseo expresar que en nuestra ciudad deben conservarse no sólo la casa de Belgrano, sino todos aquellos lugares históricos en donde haya funcionado el Poder Legislativo de la Nación, en donde se dictaron las leyes fundamentales que completaron la organización constitucional de la República.

Como lo ha dicho el miembro informante de la comisión, doctor Ruggieri y el señor diputado por Córdoba, doctor Cafferata, ambos con toda elocuencia y con conceptos precisos, venimos con este despacho a reconocer desde esta tribuna un acto que ha significado la consolidación del régimen constitucional de 1853, entregando definitivamente a la Nación, esta gran ciudad que, por el esfuerzo de todos los argentinos, se ha convertido en la más grande ciudad latina de América. (*¡Muy bien!*)

De este modo hemos podido y podemos ofrecer al mundo un gran centro de civilización y de cultura que puede rivalizar con las grandes ciudades contemporáneas. Se va a reconocer, por fin, el esfuerzo de todas las generaciones argentinas, pasadas y actantes, y creando la ciudad cabecera, como el exponente del progreso nacional.

Alguna vez se ha dicho que esta era una cabeza demasiado grande para un cuerpo que no le correspondía. También habrá que decir señor presidente, que la acumulación de tanta poten-

cia nacional en esta ciudad, a su turno, refluye sobre el resto del país y aquí, precisamente, con todos estos recursos, podemos concentrar actividades mundiales que en una situación más débil difícilmente sería posible. Se han borrado de esta manera las divisiones entre porteños y provincianos y se creó la Capital de la Nación Argentina.

Y fué en ese lugar, en ese modesto edificio de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en donde aun en el eco de la lucha fratricida se supo encontrar la solución institucional en donde, en breves momentos, se ha borrado, diríamos, esa manifestación de división entre hermanos, para estructurar la consolidación de la patria, tal como lo quisieron los fundadores de nuestra nacionalidad.

Cumplimos, señor presidente, con un mandato histórico de las generaciones pasadas y reafirmamos una vez más la consolidación de la patria.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en general el despacho.

—Se vota.

Sr. Prosecretario (Figuerola). — Afirmativa general. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en particular.

Sr. Cafferata. — Propongo que se den por aprobados los artículos que no se observen.

—Sin observación, se aprueba en particular el proyecto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado y se comunicará al Honorable Senado.

8

INDEMNIZACION EN LOS CASOS DE DESPIDO POR MATRIMONIO

(Orden del día número 17)

Núm. 1

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado el proyecto en revisión por el que se prohíbe a las empresas concesionarias de servicios

públicos, sociedades civiles o comerciales, celebrar pactos o convenios que establezcan el despido para el personal de mujeres por causa de matrimonio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Queda prohibido a los patrones, a las empresas concesionarias de servicios públicos y a las sociedades civiles y comerciales de cualquier naturaleza, dictar reglamentaciones internas y celebrar pactos o convenios que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio. Actos tales se reputarán nulos.

Art. 2º — Sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que a los interesados correspondan por el derecho común o por otras leyes especiales, los empleadores indemnizarán a los cesantes por los daños que ocasione su despido por causa de matrimonio, haya o no reglamentación, pacto o convenio que lo establezca. La indemnización por despido nunca será inferior al importe de un año de sueldos.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía es por causa de matrimonio si se produce dentro de los treinta días anteriores o de los doce meses posteriores a su celebración.

Art. 3º — Las violaciones al artículo 1º de la presente ley serán sancionadas con multa de mil a diez mil pesos moneda nacional, por cada infracción. En caso de reincidencia, se aplicará el doble del máximo de la multa.

Art. 4º — La aplicación de las multas a que se refiere esta ley se regirá en la Capital Federal y territorios nacionales, por el procedimiento establecido en la ley número 11.570, y en las provincias, por el juicio sumario que determinen sus respectivas leyes, y en cuanto al importe de las multas, ingresará a la caja del Consejo Nacional de Educación o de los consejos provinciales.

Art. 5º — Se declara no comprendido en las disposiciones de esta ley el personal del servicio doméstico.

Art. 6º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, junio 22 de 1938.

Luis Grisolia. — Santiago Carlos Fassi. — Henoch D. Aguiar. — Agustín J. Carús. — Carlos D. Courel. — Alberto Espil. — José Peco. — Carmelo P. Piedrabuena. — Silvio L. Ruggieri.

ANTECEDENTES

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Buenos Aires, enero 27 de 1938.

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Queda prohibido a las empresas concesionarias de servicios públicos, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza y a los patrones dictar reglamentaciones internas, celebrar pactos o convenios que establezcan el despido para el personal de mujeres, por causa de matrimonio, sin perjuicio de las acciones judiciales que a las interesadas correspondan.

Art. 2º — Las violaciones a la presente ley serán sancionadas con multa de \$ 1.000 a 10.000 m/n., por cada infracción. En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la multa, y tratándose de entidades con personería jurídica, ésta será cancelada.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.

Sr. Presidente (Kaiser). — En consideración **Sr. Ruggieri.** — Pido la palabra.

La Comisión de Legislación General, que me ha honrado con la misión de informar su despacho, ha acogido con viva simpatía este proyecto que viene en revisión del Honorable Senado, y le ha dado curso favorable introduciendo algunas modificaciones para hacer más eficiente y menos discutida su aplicación.

La iniciativa de legislar sobre despido por causa de matrimonio fué llevada al Senado por el doctor Palacios, bajo la impresión de procedimientos patronales incompatibles con instituciones y fines de nuestra organización civil.

Empresas que explotan importantes servicios públicos por concesión o delegación del Estado, imponen el celibato de la mujer como condición para que ésta conserve su empleo al servicio de las mismas.

El Poder Ejecutivo, no obstante la opinión adversa —a mi modo de ver más ajustada a la verdad jurídica— del señor procurador general, ha entendido que carecía de imperio para intervenir ante esas empresas con el fin de eliminar las reglamentaciones internas o los pactos o convenios que autorizan tal cesantía. En otros términos, se negó a sí mismo, decapitándola, la facultad institucional que le corresponde como poder que concede o delega, por mandato de la ley, la explotación de un servicio público.

Más aún: frente a la denuncia de esos hechos, reiterada en el Parlamento y difundida por la prensa diaria, el Poder Ejecutivo ha reducido su actividad fiscalizadora, como se desprende de sus notas remitidas al Honorable Senado, a declaraciones abstractas, sin el vigor y la convicción necesarias para encarrilar la conducta de las empresas, que atentas sólo a sus intereses pecuniarios consideran inadecuado, por ser, según ellas, menos productivo, el trabajo de la mujer, cuando ésta se vincula con el hombre por los lazos del matrimonio.

El liviano concepto del poder administrador, al que han añadido las empresas el recuerdo de algunas disposiciones legales que han previsto las cesantías por causa de matrimonio, como en el caso de la ley número 11.110, de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros de empresas particulares, ha determinado el empeño, primero, del autor del proyecto, y luego, del cuerpo de que forma parte, para la sanción de un estatuto legal que impida recursos inmorales de esa naturaleza.

En concreto, en el proyecto del Senado se prohíbe a todo empleador, comercial o civil, regido por el derecho común o por leyes especiales o disposiciones administrativas, dictar reglamentaciones o celebrar pactos que establezcan para su personal femenino la cesantía por causa de matrimonio. Sanciona con multa de \$ 1.000 m/n. a \$ 10.000 m/n. cada infracción, que se duplica en caso de reincidencia, y con la cancelación, en este último supuesto, de la personería jurídica, para las entidades que la poseen.

La sanción del Honorable Senado fué cuidadosamente estudiada en la Comisión de Legislación General. Se atendieron observaciones de distinto orden, las que parcialmente aceptadas se han traducido en el despacho que ahora considera la Cámara, que en síntesis arriba a las conclusiones que paso a fundar brevemente.

La iniciativa, como se ha recordado, fué determinada por las reglamentaciones o pactos que afectaban especialmente la situación de la mujer, pero en la comisión algunos de sus miembros, y en primer término el señor diputado por Córdoba, doctor Courel, han creído que esta ley sería jurídica y socialmente más perfecta si contemplara para ambos sexos el despido por causa de matrimonio. Es evidente la posibilidad de que la prohibición ahora aplicada a la mujer pueda mañana hacerse extensiva al hombre. Por eso, la primera modificación que se introduce en el proyecto tiende

a colocar en un pie de igualdad legal a los empleados y obreros de los dos sexos.

El artículo 1º se refiere, ante todo, a la prohibición de realizar actos determinados. A juicio del diputado que informa, la prohibición significa de suyo, implícitamente, la nulidad de todo acto que la viole. Saben los estudiosos del derecho civil que las nulidades son textuales o implícitas, que en uno y otro caso pueden ser manifiestas y absolutas si la ley declara esa nulidad, entendiéndose que esa declaración surge de las disposiciones prohibitivas de la ley. Esta es la interpretación que nace de reglas generales de derecho, que algunos códigos han recogido en su texto, lo que no ha hecho nuestra ley civil. Y es teniendo en cuenta esa omisión de nuestro código que en la comisión se proyectó el agregado que figura en la parte final del artículo 1º: «Actos tales — dice— se reputarán nulos».

Este agregado se aceptó por unanimidad, porque aun considerándolo no imprescindible, no perjudica a la ley y antes bien la robustece con la afirmación categórica de la nulidad.

El artículo 1º se ha redactado con criterio amplísimo, que excluye en absoluto toda interpretación restrictiva. Contra él no cabe otra excepción que la prevista en el artículo 5º sobre el personal de servicio doméstico.

La sanción del Senado impone multas para el empleador que viole la prohibición de este estatuto, pero sin indicar el destino de esas multas, recordando posiblemente el que le da un artículo de la ley de presupuesto, que por ser de vigencia temporal no nos asegura su continuidad.

Damos a las multas un destino expreso: al Consejo Nacional de Educación cuando se aplican en la Capital o territorios nacionales; a los consejos de provincia cuando se trata de infracciones reprimidas en territorio no federal. Y hemos agregado que para la aplicación de las multas regirá en la Capital Federal y en territorios nacionales el procedimiento de la ley número 11.570 y en las provincias el trámite sumario que determinen sus leyes respectivas.

Se entiende que esta disposición del despacho se refiere exclusivamente al procedimiento para la percepción de multas y no para las acciones que puedan deducir los damnificados, fundadas en el derecho común, en otras leyes especiales o en esta particular que ahora se discute.

Hemos suprimido del proyecto que viene en revisión del Honorable Senado la pérdida de la personería jurídica en los casos de reincidencia. La mayoría de la comisión ha creído que era excesiva una represión de esa naturaleza y que los propósitos moralizadores del legislador quedarían ampliamente servidos con la aplicación de las multas, de alcance prohibitivo para las cesantías por matrimonio.

Por último, se ha incorporado una nueva disposición: la del artículo 2º del despacho. Aunque la sanción del Honorable Senado no los negaba, hemos conceptualizado conveniente referirnos en forma muy clara y precisa a los derechos del damnificado, que pueden surgir de la legislación común, de otras leyes especiales, o ser consecuencia de las previsiones que establece el proyecto despachado. Aludimos, pues, concretamente, a todos esos derechos, y para decir sin equívocos que no se excluyen, que pueden ejercerse sin que en ningún caso el empleo de uno de ellos pueda invocarse para negar el ejercicio de cualquiera de los otros.

Se establece la indemnización por despido. Es cierto que para determinadas categorías de empleados y obreros, la cesantía tiene los efectos jurídicos previstos en nuestras leyes: en las que rigen, por ejemplo, el funcionamiento de ciertas cajas de previsión, o en otra más general, como la ley número 11.729, de reformas al Código de Comercio. Pero la indemnización por despido quiere asegurarse en esta ley por varias razones:

En primer lugar, porque comprende a toda clase de locadores de servicios, a empleados u obreros no afiliados a ninguna de las cajas de previsión o no comprendidos en los beneficios de la ley mercantil.

En segundo lugar, porque en el supuesto de estar sometidos al régimen de las cajas, podría interpretarse, de guardar silencio el proyecto y contrariando nuestro pensamiento legislativo, que no puede invocarse ningún otro derecho, aun en el caso de burlarse los fines moralizadores de esta ley, fuera de los que puedan establecer los reglamentos de esas cajas, no obstante no imponer obligación alguna a cargo de los empleadores o principales; o bien, que el simple juego de la ley número 11.729 dejaría sin indemnización a determinados empleados u obreros del comercio y de la industria, como los que poseen en el servicio una antigüedad inferior a tres meses, o que se pretende, según falsas interpretaciones judiciales, tomados en forma temporaria, no permanente.

Esta ley —subrayamos el concepto— comprende a todos, sin perjuicio de los derechos que incumben a los cesantes, en virtud de otras leyes, inclusive el de exigir, cuando les convenga, el cumplimiento de los contratos de empleo o trabajo, si se han celebrado por tiempo determinado, o si, no teniendo término fijo, la reglamentación, el pacto o el convenio respectivos aseguran la continuidad del empleo mientras falte el motivo legal que justifique la suspensión o interrupción definitiva del mismo.

Debo aclarar lo siguiente, que refleja el pensamiento de la comisión: cuando un empleado u obrero de los comprendidos en el Código de Comercio reclame la indemnización por despido que establece el artículo 2º del proyecto despachado, es evidente que no podrá exigir, por el mismo motivo, la que establece el artículo 157, inciso 3º, de la ley mercantil, salvo la que pueda corresponderle por falta de preaviso, no afectada por este despacho.

Por último, hemos considerado conveniente contemplar el derecho de los damnificados, porque, frente a la gravedad que comporta el despido por causa de matrimonio, la indemnización debe tener un límite mínimo superior al fijado por otras leyes. Por eso se estatuye la de un año de sueldos, que no es —y lo puntualizo— un monto rígido, sino mínimo, ya que de las pruebas puede surgir el derecho a reclamar una indemnización mayor. Debo añadir que este derecho se reconoce para todo caso de despido por causa de matrimonio, aunque no esté impuesto por una reglamentación, por un pacto o convenio y sí sólo por un acto unilateral del empleador, haya sido, o no, preavisado el cesante en alguna forma.

También hemos querido evitar subterfugios que permitan a los empleadores de mala fe escapar a las prohibiciones u obligaciones que impone esta ley. Me refiero a la posibilidad de que se disponga el despido sin invocar la causa matrimonial, aunque ésta sea, en realidad, la determinante de la cesantía.

Para impedir ese recurso, el despacho establece, aceptando la sugestión traída al seno de la comisión por los señores diputados Fassi y Aguiar, la presunción de que el despido es por causa de matrimonio, si se produce dentro de los treinta días anteriores o de los doce meses posteriores a su celebración. Desde luego, esa presunción establecida en la ley, puede ser destruida por la prueba del empleador que invoque un motivo distinto. Con la aclaración de que esta última prueba no podrá referirse a ra-

zonas generales de mejor servicio, de economía, de disminución del trabajo, etcétera; en esos casos la presunción de la ley no tiene réplica; la prueba contra ella deberá referirse a hechos concretos que hagan imposible, por culpa del empleado u obrero, la continuación del contrato de empleo o de trabajo.

Estos son, sumariamente expuestos, los aspectos fundamentales del despacho, inspirado en el interés público de proteger la unión de los sexos y para que se cumplan los fines sociales y eternos de esa unión. Y podríamos agregar, la unión legal de los sexos, ya que ante la imposibilidad de suprimir las fuerzas expansivas del instinto, el régimen de las cesantías por causa de matrimonio sólo servirá para estimular las uniones ilegales, sin resolver el problema que plantean las empresas para justificar sus reglamentaciones prohibitivas.

Esta iniciativa cuenta con el sólido prestigio que le ha dado el apoyo sin límites de la opinión pública. Organos periodísticos de las más opuestas tendencias o ideologías han denunciado el tipo de despido que nos proponemos combatir con esta ley como una verdadera conspiración contra los intereses fundamentales del país y contra instituciones que son pilares de su estructura jurídica.

Véanse, entre otras, las siguientes expresiones del pensamiento periodístico, reproducidas más extensamente en el Honorable Senado por el autor del proyecto:

Del diario «La Nación», en un editorial del 16 de septiembre de 1937: «No se ha vacilado en recurrir a un procedimiento que asombra por su arbitrariedad, y se ha encontrado tan natural la solución extraordinaria que ni siquiera se ha reparado en el extremo a que llevarían sus consecuencias. No se trata tan sólo, en efecto, de resistirse al acatamiento de una ley nacional, sino también de conspirar contra las supremas conveniencias sociales, como son las relativas al desarrollo de la nupcialidad. Sería realmente inaudito que las empresas de servicios públicos pudieran entregarse por tal modo a una campaña que afectaría a la Nación en su progreso y en su moral.»

Del diario «La Prensa» de la misma fecha: «No debe olvidarse que también la misma ley dispone que los contratos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Y, precisamente, se daña al orden público y a las buenas costumbres cuando se pretende dar validez a una cláusula contractual como la impugnada en el Senado.» Y más adelante:

«En este caso, lo que interesa fundamentalmente es la fase moral. No podrá hallarse argumento capaz de atenuar la desfavorable impresión del recurso, cuya aplicación afecta aspectos esenciales de la organización social. Y es en este sentido que la minuta votada por el Senado debe merecer preferentemente la atención del Poder Ejecutivo.»

Se refería a un pedido de informes formulado con anterioridad a la iniciativa, después articulada en forma de proyecto.

El diario «La Razón», que por la tendencia general de su propaganda no puede sospecharse como predisposto a atacar el interés de las empresas, decía lo siguiente: «El gobierno debe recoger el eco de las palabras pronunciadas ayer en el Senado y está en la obligación de dictar cuanto antes las medidas que impidan a una empresa extranjera conspirar contra el desenvolvimiento natural del pueblo que la hospeda. Sin duda, la opinión pública, que tantas veces ha escuchado el elogio que se hace a los ferrocarriles, que ha visto a éstos recurrir a la vieja frase del fomento y del progreso, que siempre emplean para defender sus intereses, que está acostumbrada a leer en sus notas la acción patriótica que desarrolla para impulsar la civilización primitivamente dominada por el desierto, repudiará esa duplicidad que pone en descubierto la sola razón material que los anima, al enterarse que exoneran a las madres e impiden el casamiento con un texto inglés que daña los intereses argentinos.»

El objetivo fundamental de este proyecto, señores diputados, es llegar a la inexistencia de los despidos por matrimonio. El país no puede aceptar procedimientos que atenten contra la nupcialidad, contra la maternidad, contra los fines de supervivencia humana y de progreso demográfico que cumple la unión de los sexos.

Las demás disposiciones del proyecto son secundarias, aunque imprescindibles: tienden a asegurar el éxito del objetivo primordial. De ahí la severidad de esas disposiciones.

Con ese concepto, la Comisión de Legislación General ha formulado su despacho y espera el voto favorable y unánime de la Honorable Cámara. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

En homenaje a la brevedad me limitaré a expresar la adhesión de nuestro sector al despacho fundado con tanto acopio de doctrina por el señor diputado por la Capital.

A mi juicio, este despacho extiende generosos principios de derecho civil, para evitar que

cláusulas de la índole que ha señalado el señor diputado, puedan impedir el cumplimiento de fines naturales como es el caso del matrimonio. En ese sentido no hace otra cosa que aplicar los principios de derecho civil consignados en los artículos 530, 531 incisos 3º y 4º, 953 y 1.047 del código pertinente, que cito como homenaje al codificador y para demostrar que no olvidamos los principios esenciales que informan nuestro código, cuando pretendemos mejorar las relaciones humanas y aplicar normas de mayor justicia, diré, cuando establecemos la nulidad del género de condiciones o de cláusulas a que se ha referido el señor diputado por la Capital, y que según la propia nota de Vélez Sársfield, al artículo 530, se reputan condiciones imposibles por contrarias a las nuevas costumbres, pues dice así: «En el lenguaje del derecho se entiende por buenas costumbres el cumplimiento de deberes impuestos a los hombres por las leyes divinas y humanas.»

De tal suerte, señor presidente, afirmamos que la sanción de este despacho, no hará sino aplicar humanos principios de derecho civil, traducidos en las nuevas corrientes que transforman el derecho privado, al cual debemos adherir porque impregna todo el fondo de nuestra organización jurídica y de un gran sentimiento de justicia.

Con estas palabras, muy breves por cierto, dejo expresada nuestra adhesión al despacho informado por el señor diputado por la Capital. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Courel. — Pido la palabra.

Mi firma puesta al despacho que se discute y que firman la unanimidad de los miembros de la Comisión de Legislación General, significa, al mismo tiempo, también, la adhesión del bloque demócrata nacional a la idea que sustenta el mismo. Bien comprende el diputado que habla y coincide totalmente con lo manifestado por el señor diputado Pinto en lo que se refiere a las causas inmorales ya analizadas dentro de los artículos 530, 531, 953 y 1.047 del Código Civil y comprende, naturalmente, que la causa del matrimonio no puede ser una causa inmoral para el despido.

Pero en el deseo de llegar prácticamente a concretar una iniciativa presentada en el Honorable Senado por el senador Palacios y en presencia de muchos casos que ha tenido que dilucidar la justicia, nuestra firma lleva en sí también el propósito enunciado por aquel distinguido legislador, de contribuir dentro de las leyes sociales a obtener un mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y a prote-

ger a las clases que laboran el porvenir del país.

Nada más. (*¡Muy bien!*)

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Estoy de perfecto acuerdo con los propósitos que se persiguen con este proyecto de ley.

Mi intervención en este debate, que será brevísima, sólo tiene por objeto preguntar a los señores abogados si no sería posible ya, tratándose de leyes que persiguen esta clase de fines destinados a amparar y a defender a clases sociales modestas, si no sería posible adoptar sistemas y leyes de efecto automático.

Voy a explicar. Todas estas reflexiones que me permitiré hacer alrededor de este proyecto de ley, me han sido sugeridas por el recuerdo de algunas consideraciones que hizo alguna vez el presidente de Méjico, general Calles, a propósito de la nueva legislación obrera. El general Calles decía: «Se sancionan hoy como leyes de protección del trabajo, disposiciones bien articuladas, perfectamente concebidas, pero que del punto de vista práctico ellas no realizan la defensa de los intereses que se trata de defender, en forma automática. Es decir, que al obrero o empleado protegido no le alcanzan los beneficios que le acuerda la ley si no recurre directamente a los tribunales de justicia para que lo hagan efectivo.»

Sería, pues, necesario buscar el procedimiento que lleve la protección en forma automática, sin necesidad de que el protegido tenga que recurrir a un proceso judicial en defensa de sus derechos.

En el caso que se discute, si un empleador despidió a una empleada por razón de matrimonio, ¿cómo conseguirá la empleada anular esa resolución del empleador y que se le haga efectiva la indemnización correspondiente? Solamente por una resolución judicial, es decir, que esta ley se va a sumar a muchas otras cuyos efectos sólo se obtienen si el interesado recurre a los tribunales en defensa de sus derechos.

Así, la ley de accidentes del trabajo, destinada a la protección del obrero que se accidenta, origina una cantidad fantástica de pleitos, pues no tiene el empleado otro medio en procura de la indemnización correspondiente, sino recurrir a los tribunales, y después de una gestión larguísima, que origina gastos muchas veces elevados que reducen la indemnización, obtiene una resolución favorable.

En la reforma del Código de Comercio tenemos otro caso igual. Los empleadores no cumplen con la ley de despido y los empleados

perjudicados necesitan recurrir a los tribunales, hacer allí una larga gestión para que los beneficios de la ley se hagan efectivos.

Yo no alcanzo a resolver este problema y siento la necesidad de ser auxiliado por los que entienden más de estas cosas. Yo les pregunto si no sería posible arbitrar algún procedimiento automático, casi mecánico, para evitar esta necesidad de recurrir a los tribunales para el cumplimiento de la ley.

Desde luego, yo he de votar este despacho porque creo que a pesar de todos los inconvenientes que pueda tener —como sería la falta de efecto automático a que me estoy refiriendo— constituirá una valla que obligará a los empleadores a guardarse muy bien de despedir a sus empleadas por causas de matrimonio ulterior. Sé que va a producir efectos útiles, pero en el deseo de perfeccionar, que debe ser siempre el anhelo que nos anime a todos, yo presento la consulta a los abogados que hay en la Cámara a fin de que la consideren y la tengan en cuenta para los fines consiguientes.

Sr. Pandolfo. — Pido la palabra.

La ausencia de nuestro compañero de sector, doctor Fassi, me obliga a pronunciar algunas palabras en nombre del sector, para manifestar la conformidad de los señores diputados que lo fomamos, a este proyecto de ley, y lo hago para que no aparezca ausente el sector antipersonalista en la votación de esta ley, cuyos fines humanitarios han elogiado los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra.

Sr. Aguiar. — Pido la palabra.

Sobre las sugerencias del señor diputado por la Capital con respecto al otorgamiento automático de la indemnización a las personas a que se refiere el proyecto que tenemos en discusión, debo manifestarle que, dentro de nuestro sistema institucional, cuando alguien reclama un derecho y hay otros que lo desconocen, necesariamente, ha de decidir la controversia un pronunciamiento judicial.

La comisión ha tratado de favorecer la situación de las personas que pudieran ser despedidas por causa de matrimonio, creando la presunción *juris tantum* de que cuando el despedido se efectúa dentro de cierto tiempo anterior o posterior al matrimonio, lo tiene por causa a éste. Aun más, señor presidente, siempre en mira de facilitar la solución del problema que el despedido plantea, se ha establecido una indemnización tarifada mínima por razón de él, de un año de sueldo, indemnización que podrá ser mayor si es mayor el daño. Ello dependerá

de la prueba que presente la persona damnificada. En presencia, pues, de la situación actual de nuestro sistema institucional, la comisión ha escogido las medidas legales por las cuales podría llegar a hacer más fácil la efectividad de la indemnización creada a favor de las personas a que se refiere el proyecto.

Sr. Repetto. — ¿Me permite el señor diputado? Le voy a recordar estos dos hechos, para que se entienda mejor lo que quiero puntualizar con las breves palabras que he pronunciado.

Si un empleador falta a la ley sobre jornada de ocho horas, los perjudicados no necesitan recurrir a los tribunales para ser protegidos contra esa violación; si se trata de una violación de la ley de descanso dominical, los damnificados tampoco necesitan recurrir a los tribunales para hacer un pleito. De manera que hay, en estas cuestiones de legislación del trabajo dos tipos de leyes: unas, de efecto mecánico, automático, y otras, que necesitan, fatalmente, que se inicie una causa en los tribunales para que la gente modesta que intenta proteger la ley, pueda alcanzar los beneficios que la misma le otorga. Para esta cuestión no tengo ninguna solución.

Sr. Aguiar. — El proyecto contempla dos situaciones: La infracción a la disposición del artículo 1º, punida por el artículo 3º con multa, a fin de prevenir las infracciones; pero como a pesar de la pena establecida, el empleador puede, al infringir la ley, dañar a su empleado, además de la pena, que es de derecho penal, establece la indemnización civil, y facilita la prueba del damnificado creando, como se ha dicho, la presunción *juris tantum*, de que fué despedido por causa de matrimonio; de manera que la víctima del empleador no tiene más que probar su calidad de empleado y que fué despedido tanto tiempo antes o después de haber contraído matrimonio para que prospere su pedido de indemnización; en consecuencia, es el empleador quien tendrá que producir la prueba de descargo para eximirse de la responsabilidad que el proyecto consagra. Todo eso, señor diputado, en el juicio correspondiente, del cual no se puede prescindir; de manera que hemos hecho cuanto ha sido posible para facilitar que la persona perjudicada obtenga la indemnización de su agravio en la forma más directa posible. Se trata de un derecho privado, de un derecho que cuando quiere ejercitarse y hay alguien que lo desconoce, corresponde a la justicia pronunciar la última palabra.

Nada más.

Sr. Repetto. — El presidente Calles decía, con cierta malicia, que ésta es una legislación que fomenta los pleitos. Yo, desde luego, no adhiero a esa opinión totalmente autorizada.

Sr. Pandolfo. — Este asunto es, en cierto modo, parecido a la ley de vinos que votamos hace un momento, porque el proyecto del Senado tiene dos artículos y el despacho de la comisión es de seis artículos. Propondría que se adoptara el mismo procedimiento anterior: que la Secretaría enuncie los números de los artículos y la Cámara los vote en cada caso.

Sr. Ruggieri. — Como las palabras del señor diputado por Santa Fe podrían inducir en error a los demás señores diputados, quiero hacer notar que este caso es distinto al de la ley de vinos. Ahora se trata de un proyecto que viene en revisión y que debe votarse en general y particular, como los despachos ordinarios de las comisiones. En realidad, si no he percibido mal la intención del señor diputado, lo que él desea es que en lugar de leer el texto del artículo se enuncie solamente su número, y que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Pandolfo. — Así es.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — En consideración en particular.

— Sin observación, se aprueba el artículo 1º.

— En consideración el artículo 2º.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Como puede quedar flotando la duda respecto al artículo 2º, de que la indemnización por despido, que nunca será inferior al importe de un año de sueldos, se acumule a las indemnizaciones provenientes de leyes especiales, quiero aclarar que me parece haber entendido de la exposición del señor miembro informante, que la indemnización emanada del artículo 157, apartado 3º del Código de Comercio, reformado por la ley número 11.729, no podrá acumularse a la indemnización del proyecto en consideración.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

En el informe en general he aclarado, precisamente, la situación a que se refiere el señor diputado por la Capital. Si el empleado u obrero despedido por causa de matrimonio opta por

la acción que emerge de esta ley especial, no podrá acumularle la acción de indemnización por despido que establece la ley número 11.729, salvo la que puede corresponderle por la falta del preaviso. Es decir, que sobre el hecho del despido no cabe más que una indemnización, sin perjuicio de la relativa a la falta de preaviso, cuando el empleado u obrero está comprendido en los beneficios de la ley número 11.729.

La situación es distinta respecto a los derechos que puede tener el empleado u obrero cesante comprendido en la ley número 11.110, que establece, para los casos de despido por matrimonio, el derecho a reclamar de la Caja de Jubilaciones la devolución de sus aportes o el cobro de una jubilación extraordinaria, según antigüedad en el servicio. La distinción es explicable, porque en este último caso no se afecta el patrimonio del empleador.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 2º.

— Se aprueba.

— En consideración el artículo 3º.

Sr. Solá. — Pido la palabra.

Desearía que la comisión me aclarara el alcance de la última parte del artículo 3º. Provoco esta aclaración, para que si el caso se presenta, no haya dificultad en la aplicación de la ley.

Se dice al final del artículo: «En caso de reincidencia se aplicará el doble del máximo de la multa». Entiendo que es para cada acto de reincidencia en que pudiera incurrir el empleador.

Sr. Ruggieri. — Para cada caso de reincidencia se aplicará el doble del máximo de la multa que establece la primera parte del artículo.

Sr. Solá. — Es decir, \$ 20.000 m/n. por cada acto de violación de la ley, a partir de la reincidencia.

Sr. Ruggieri. — Deseo aclarar que en la sanción del Senado se incluía otra pena subsidia-ria para los casos de reincidencia: además de la multa, tratándose de sociedades con personería jurídica, se les cancelaba esta última. La Comisión de Legislación General ha entendido que era una represión excesiva y la ha eliminado del despacho.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Propone alguna modificación el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Solá. — No, señor presidente. Me basta la aclaración del señor miembro informante de la comisión y con ese concepto voy a votar el artículo.

—Se vota, y aprueba el artículo 3°.

—En consideración el artículo 4°.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Con el propósito de evitar dificultades en la aplicación de esta ley, solicito algunas aclaraciones para la recta interpretación que debe darse a este artículo. Establece que el procedimiento que ha de regir para la aplicación de esta ley en la Capital y territorios nacionales, será el que estatuya la ley número 11.560 y en las provincias el juicio sumario que dispongan sus respectivas leyes. Deducimos que ésta no es una ley especial que pudiera caer bajo la competencia de los jueces federales, sino una ley complementaria de la ley común, reglamentaria del Código Civil y, por tanto, ley de fondo, aplicable por los jueces del fuero común.

Sr. Ruggieri. — ¿Si me permite, señor diputado?

Hice notar —y se desprende del texto expreso del artículo— que se refiere a la percepción de multas y no a las acciones que tengan los damnificados para reclamar el pago de indemnizaciones. En este último caso el procedimiento es el que rige en cada provincia. Para este último no legisla el despacho.

Sr. Godoy. — No establece, pues, ningún procedimiento para perseguir la indemnización.

Sr. Ruggieri. — Se refiere exclusivamente a la ejecución de las multas, que es una cosa distinta.

Sr. Godoy. — Quiere decir que esta ley establece dos clases de sanciones: una civil y otra de orden penal. Para la acción civil de indemnización...

Sr. Ruggieri. — Se sigue el procedimiento común.

Sr. Godoy. — Con intervención de los jueces de fuero común, por tratarse de la reglamentación de un artículo del Código Civil.

Sr. Ruggieri. — Y como lo establezca cada provincia.

Sr. Godoy. — En cuanto al procedimiento, no hay dificultad en la fase civil de la acción. La acción penal estará supeditada a lo dispuesto en el artículo 4°. No creo que haya una difi-

cultad muy grande por la invasión que podría encontrarse respecto de las facultades jurisdiccionales de las provincias porque se limita a decir que el procedimiento será sumario, lo que no puede traer entorpecimiento.

Sr. Solá. — Como el Código Civil respecto a las acciones posesorias.

Sr. Ruggieri. — Por otra parte, el señor diputado no podría formular objeción de ninguna naturaleza; acabamos de aprobar, con su entusiasta adhesión, la nueva ley de vinos, que establece un procedimiento judicial de carácter nacional, con instancias, plazos, formas de dictar sentencia, etcétera, aplicable en toda la Nación, prescindiendo de la legislación procesal de cada provincia.

Sr. Godoy. — No hago objeción. He dicho que iba a solicitar aclaraciones para que no hubiera dificultades de interpretación y estamos de acuerdo con el señor miembro informante en que en realidad no hay mayor dificultad. Sólo quiero agregar que cuando dice el proyecto que las multas ingresarán al Consejo Nacional de Educación o a las cajas de los consejos provinciales, se entiende que donde no haya una entidad con esa precisa denominación, será la que substituya en el orden provincial al Consejo de Educación.

Sr. Ruggieri. — Así es.

Sr. Godoy. — Con esas aclaraciones habremos dejado perfectamente establecida cuál es la recta interpretación.

Sr. Hardoy. — Hay en las provincias consejos de educación de carácter local que tienen capacidad financiera para percibir fondos y en ese caso ¿a qué entidades pasarán las multas?

Sr. Godoy. — Entiendo que deben ingresar a la entidad central, a la que tiene la dirección de la educación común.

Sr. Ruggieri. — A la dirección o entidad general de cada provincia.

Sr. Hardoy. — Es bueno que quede así aclarado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 4°.

—Resulta afirmativa.

—Se dan por aprobados los artículos 5° y 6°.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado y se comunicará al Honorable Senado.